



GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE



NOTIFICACIÓN DE ACUERDO

El Consejo de Gobierno, en su reunión del día 29 de agosto de 2019, adoptó entre otros, el siguiente Acuerdo:

Visto el expediente administrativo relativo a la discrepancia, la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, y demás normativa de general y pertinente aplicación, previo informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, sobre la base de las siguientes consideraciones, se emite el siguiente **ACUERDO**,

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Con fecha 19 de septiembre de 2017 el entonces Director General de Ganadería y Desarrollo Rural dictó Resolución por la que estimó indemnizar a D. Antonio Ruiz González con la cantidad de 900.-€ por la pérdida del caballo de su titularidad, con nº de microchip 724906000048460.

SEGUNDA.- La Consejería interesada instruyó un expediente de convalidación administrativa que envió a fiscalizar a Intervención. Este expediente fue reparado por la Intervención Delegada por entender que la Resolución que se pretendía convalidar adolecía de un doble defecto: uno, de índole administrativo, por vicio de competencia y otro, de índole financiera, por haberse dictado sin el previo y preceptivo informe fiscal. Por ello, entendió necesario seguir el cauce de la omisión de fiscalización previsto en el art. 148 LF Cantabria y elevar el expediente al Consejo de Gobierno para la adopción del acuerdo que estimara procedente.

TERCERA.- Formulada discrepancia en los términos del art. 147 LF Cantabria, la Intervención General confirma el reparo de la Intervención Delegada por lo que, subsistiendo la discrepancia, corresponde al Consejo de Gobierno, previo informe de la Dirección General del Servicio Jurídico emitido el 12 de febrero de 2019, adoptar la resolución definitiva.

Conforme al fundamento de derecho único del citado informe, textualmente:

"[...] Sin embargo, analizando los hechos concernidos en el presente expediente, se debe señalar que en el acto administrativo dictado ha concurrido una doble infracción tanto por vulneración del art. 140.2 de la Ley 6/2002 como por vulneración del art. 140 LF Cantabria. En este sentido, se debe distinguir entre la perspectiva de la legislación

de régimen jurídico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la legislación presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria; la doble vertiente administrativa y presupuestaria imbricada en el acto administrativo que reconoce una obligación económica a cargo de la Hacienda autonómica, respectivamente. Así, respecto de la primera, el Director General de Ganadería y Desarrollo Rural no era el órgano administrativo competente para dictar la resolución del procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial por aplicación del art. 140.2 de la Ley 6/2002, *ratione temporis*, sino que lo era el Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación.

Ciertamente este vicio de incompetencia jerárquica de que adolece el acto administrativo es susceptible de ser subsanado mediante la convalidación al amparo del art. 52.3 Ley 39/2015: "Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado". Es decir, en este concreto expediente por su convalidación por el Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación. Convalidación que, en este caso, retrotrae su eficacia a la fecha de la Resolución del Director General dado que, según se afirma por la Consejería, los supuestos de hecho necesarios ya existían en la fecha a la que se retrotrae su eficacia y la misma no lesiona derechos o intereses legítimos de otras personas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39.3 de la Ley 39/2015.

No obstante lo anterior, desde la perspectiva de la legislación presupuestaria es un hecho que la Resolución del Director General de 19 de septiembre de 2017 se dictó sin el previo y preceptivo informe fiscal requerido en el art. 140 LF de Cantabria, en su modalidad de fiscalización e intervención previa de requisitos básicos (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2013). Y ello impide que la convalidación administrativa sea bastante para que la resolución que se convalida surta la plenitud de sus efectos pues el supuesto de hecho necesario para contraer la obligación económica en la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la fiscalización previa y preceptiva, no existía en la fecha en que se dictó la Resolución a convalidar. Por ello, la Intervención General entiende necesaria la tramitación del procedimiento de omisión de fiscalización previsto y regulado en el artículo 148 de la LF Cantabria para que por el Consejo de Gobierno se decida, en su caso, la convalidación financiera de la resolución que se convalida. [...]"

Por todo lo expuesto, atendidas las circunstancias concurrentes en el presente expediente,

SE ACUERDA,

DESESTIMAR la discrepancia planteada por la entonces Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, mostrando conformidad con el criterio de la Intervención General contenido en el informe de 21 de enero de 2019, resolviéndose la discrepancia a su favor.

Lo que comunico para su conocimiento.
Santander, 29 de agosto de 2019.
EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo.: Francisco José Gutiérrez García.

SR. INTERVENTOR GENERAL.